



JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: 2084/2016

ACTOR: ***

AUTORIDAD DEMANDADA: "PROACTIVA
MEDIO AMBIENTE CAASA", S.A. DE C.V.

TERCERA INTERESADA: COMISIÓN
CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES.

MAGISTRADO PONENTE: ALFONSO ROMÁN QUIROZ

Aguascalientes, Aguascalientes, dieciséis de noviembre de
dos mil dieciocho.

V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de nulidad
número 2084/2016.

RESULTANDO

I. Mediante escrito presentado en Oficialía de Partes del
Poder Judicial del Estado el *quince de diciembre de dos mil dieciséis*, remitido a
esta Sala al día hábil siguiente, *****, demandó la nulidad del acto
administrativo que precisó en los siguientes términos

*"...II.- RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO.-*

A) LAS TARIFAS EN BASE A LAS CUALES PROACTIVA MEDIO
AMBIENTE CAASA, S.A. DE C.V. DETERMINA Y ESTABLECE LOS MONTOS
QUE PRETENDE COBRARME POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL
SUSCRITO EN EL DOMICILIO QUE MAS ADELANTE SE DETALLA.

B) LA DETERMINACION Y PRETENDIDA LIQUIDACION DE LOS
CREDITOS, UNO POR UN MONTO DE \$20,011.00 (VEINTE MIL ONCE PESOS
00/100 M. N.) QUE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA, S.A. DE C.V.
FINCA AL SUSCRITO(A), MEDIANTE EL RECIBO DE COBRO NUMERO ***
DE LA CUENTA ***, RELATIVO AL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ***,
DE ÉSTA CIUDAD DEL CUAL EL SUSCRITO SOY USUARIO Y TITULAR
ANTE LA DEMANDADA, POR SUPUESTO CONCEPTO DE SUMINISTRO Y
CONSUMO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y OTROS
RUBROS DESCONOCIDOS PARA EL (LA) SUSCRITO (A) EN EL PERIODO
QUE AHÍ MISMO SEÑAL, ASI COMO TODAS SUS CONSECUENCIAS
LEGALES, ENTES ELLAS, LAS CANTIDADES QUE PROACTIVA MEDIO
AMBIENTE CAASA, S.A. DE C.V. PRETENDE SEGUIR FINCANDOME POR LOS
MISMOS CONCEPTOS HASTA LA RESOLUCION DEL PRESENTA JUICIO EN

EL MISMO DOMICILIO Y BAJO LA MISMA CUENTA, DOCUMENTO QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE OCURSO COMO DOCUMENTO FUNDATORIO DE MI ESCRITO DE DEMANDA

C) TODOS Y CADA UNO DE LOS COBROS QUE PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA, S.A. DE C.V. HA HECHO AL SUSCRITO(A) POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA, ASI COMO SUS ACCESORIOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 Y EL 13 DE DICIEMBRE DE 2016, RESPECTO DE LA CUENTA QUE TIENE IDENTIFICADA ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NUMERO ***, RELATIVA AL DOMICILIO UBICADO EN LA ***, DE ÉSTA CIUDAD, VIRTUD DE HABERLOS REALIZADO SIN UNA BASE LEGAL QUE SE LO PERMITIERA; ESTO ES, CARENTE DE TARIFAS DEBIDAMENTE APROBADAS CONFORME A DERECHO EN FRANCA CONTRAVENCION A LO INDICADO POR EL ARTICULO 86 EN RELACION CON EL 96, AMBOS DE LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUSCALIENTES Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO, CONDENARLA A QUE ME LAS RESTITUYA INTEGRAMENTE.

II. El *veinte de febrero de dos mil diecisiete*, se admitió a trámite la demanda, se recibieron las pruebas ofrecidas y se ordenó emplazar a las demandadas.

III. Por autos de *cuatro de mayo y diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete*, se tuvo respectivamente a la tercera interesada y a la demandada por contestando la demanda, se recibieron las pruebas que ofrecieron y se corrió traslado al actor para que formulara ampliación a la demanda.

IV. Mediante proveído de *nueve de octubre de dos mil dieciocho* al haber transcurrido el término concedido a la actora para que formulara ampliación a la demanda, sin que lo hubiere hecho, se declaró perdido su derecho para hacerlo y se señaló fecha para audiencia de juicio.

V. En audiencia de juicio celebrada el *atorce de noviembre de dos mil dieciocho*, se desahogaron las pruebas admitidas a las partes, se agotó el periodo de alegatos, y se citó el asunto para dictar sentencia definitiva.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver del presente juicio, conforme a los artículos 51, segundo párrafo, y 52, último párrafo, de la Constitución Local; 33 A, y 33 F, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 1, primer párrafo, y 2, fracción I,



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 2084/2016

de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, toda vez que se impugna una resolución administrativa emitida por la concesionaria de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado o saneamiento y su reuso en el Municipio de Aguascalientes, actuando como autoridad.

SEGUNDO. La existencia del acto administrativo impugnado, se acredita con el original del recibo número *** emitido por la concesionaria “Proactiva Medio Ambiente CAASA”, S.A. de C.V., el *veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis*, visible a foja 9 de los autos de resolución en la que se determina y exige a *** el pago de \$20,011.00 (VEINTE MIL ONCE PESOS 00/100 M.N.), por 48 meses de adeudo del servicio de agua potable que se suministra en el bien inmueble ubicado en ***, en esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, cuenta ***, cuyo último mes de facturación es el de agosto de dos mil dieciséis —M-08-2016—.

Se concluye lo anterior, porque si bien es cierto que la demanda es incongruente al precisar el acto impugnado y luego al ofrecer la prueba documental, e incluso ninguno de esos apartados coincide con la totalidad de los datos que aparecen en el recibo que obra a foja 9 de los autos.

No menos cierto lo es, que para resolver la cuestión efectivamente planteada debe interpretarse en su conjunto la demanda y el documento que le acompaña para fijar de manera clara y precisa los puntos controvertidos.

Al efecto, el actor precisa como resolución impugnada la descrita en el primer resultando de la presente sentencia destacando que el monto del adeudo es por la cantidad de \$20,011.00 (VEINTE MIL ONCE PESOS 00/100 M.N.), misma que coincide con la que del recibo que adjunta a su escrito inicial de demanda, además del domicilio del predio que lo es ***, así como el nombre del usuario ***.

De ahí que, aunque no coincidan los datos plenamente, deberá tenerse como acto impugnado el recibo que se acompaña a la demanda por ser expresa la voluntad del accionante de que así se valore la misma.

Probanza que al provenir de las partes y sin que exista objeción alguna, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 335, 341 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, según su numeral 47.

TERCERO. Causales de improcedencia.

La concesionaria demandada afirma que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 26, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, toda vez que esta Sala Administrativa es incompetente para conocer del presente asunto, esto dice: a) porque el recibo de pago impugnado no lo realiza en funciones de autoridad, y b) porque la naturaleza de la controversia no es administrativa ni fiscal, sino mercantil.

Refiere que el recibo de pago no lo emite en funciones de autoridad, porque si bien es prestador del servicio público de agua potable en virtud de la concesión que le fue otorgada por el Municipio de Aguascalientes, lo cierto es que la relación jurídica que tiene con el usuario deriva de una relación contractual —contrato de suministro—, por lo que su relación es de coordinación y no de supra a subordinación, razón por la que no se encuentra actuando en funciones de autoridad.

Bajo esa premisa, refiere que el requerimiento de pago no es un acto de autoridad, dado que no proviene de una relación de supra a subordinación, ni se emite de manera unilateral por parte de la concesionaria, sino que tiene como base el incumplimiento a la obligación de pago derivada del contrato de suministro que celebró con el usuario, en una relación de coordinación.

Como sustento de su afirmación, invoca la tesis de jurisprudencia número P./J. 92/2001, de la novena época, con número de registro: 189353, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 2084/2016

de la Nación, cuyo rubro indica: “AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.”

Agrega que conforme a lo previsto en los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, la naturaleza de la controversia derivada del suministro de agua potable no es administrativa ni fiscal, sino mercantil, por lo que cualquier controversia suscitada entre las partes derivadas de ese tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, de conformidad con el numeral 104, fracción II, constitucional.

Como sustento de su afirmación, invoca las siguientes tesis aisladas 2a. XLII/2015 (10a.) —con número de registro: 2009790— y 2a. CIX/2013 (10a.) —con número de registro: 2005149—, ambas de la décima época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro indican, respectivamente:

“COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].”

“CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ÉSTE SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL.”

Esta Sala Administrativa resolvió en pleno mediante interlocutoria de *veintidós de mayo de dos mil diecisiete*, que no se actualizan las citadas causales de improcedencia, por lo que ya fueron motivo de decisión de este órgano jurisdiccional y por tanto existe cosa juzgada entorno a ello.

En efecto, por virtud de la institución de la cosa juzgada, los temas definidos por un órgano jurisdiccional en una resolución contra

la que no procede medio de defensa ordinario alguno no son susceptibles de modificarse, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica.

En la especie, el recurso de reclamación fue interpuesto contra el auto de admisión de demanda, en tal medio de defensa esta Sala definió en Pleno, que no se configuraban los motivos de improcedencia expuestos por la concesionaria demandada, de lo que se sigue, que tal determinación constituye cosa juzgada y, por ende, las invocadas causales ya fueron examinadas.

En la inteligencia de que no impide llegar a esta conclusión la circunstancia de que los argumentos por los que la demandada concluya se actualizan las causales de improcedencia no sean exactamente iguales, pues mientras exista identidad temática prevalece el principio de cosa juzgada.

CUARTO. En virtud de que no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia invocadas por la demandada, ni esta Sala advierte que se actualice alguna de oficio, lo que procede es estudiar los conceptos de nulidad que hace valer la accionante, los que por economía procesal no se transcriben, aunado a que no es un requisito formal de las sentencias.¹

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por la demandada, sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado.

QUINTO. Estudio de los conceptos de nulidad.

En el PRIMERO de los conceptos de nulidad del escrito inicial de demanda señala la actora que la concesionaria está impedida a cobrarle cantidad alguna por ningún concepto, en la medida de que no cuenta con tarifas autorizadas y conformadas de acuerdo a la ley y

¹ Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la novena época, localizable con número de registro: 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro señala: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”**



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 2084/2016

entendido a contrario sensu lo contenido en el artículo 86 de la Ley del Agua del Estado de Aguascalientes, por lo que no está obligado al pago de servicio público alguno.

Agrega, que para que esté obligado al pago del servicio de suministro de agua potable y sus accesorios, las tarifas deben estar autorizadas en términos de la Ley del Agua del Estado de Aguascalientes, lo que no ocurre, pues los términos que establece dicha ley se encuentran señalados en su artículo 96.

Que quien determina, aprueba y publica las tarifas en base a las cuales la demandada pretende cobrarle los servicios lo es CCAPAMA, autoridad que carece de competencia legal para tal efecto, como se puede apreciar del artículo segundo transitorio de la Ley del Agua del Estado de Aguascalientes.

Continúa diciendo que no existe formula alguna elaborada por el municipio en términos del artículo 96 de la Ley del Agua, en la que se haya determinado las tarifas que se pretenden cobrar, que tampoco existe opinión alguna por parte del Instituto del Agua del estado de Aguascalientes, respecto a las tarifas puestas a su consideración y que tampoco existe aprobación alguna por parte del cabildo.

Es INOPERANTE el concepto de nulidad.

Lo anterior, ya que la actora no expone por qué las tarifas aprobadas por la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), no son las establecidas conforme a la Ley del Agua o por qué afirma que están fuera de esos lineamientos en cuanto a su aprobación, ni expone la razón por la que afirma que las formuladas aprobadas por el Municipio para la actualización de las tarifas no es legal o en su caso por qué afirma que el Municipio no aprobó esas formulas.

Pues, de conformidad con lo establecido en los artículos

5, 6 fracción XII, 16, fracción III, del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, mismos que a la letra dicen

“ARTICULO 5o.- La Comisión tendrá como objeto:

I.- Regular y garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a los asentamientos humanos municipales del Municipio de Aguascalientes, con la calidad, cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad, con tarifas equitativas y en forma sustentable; así como normar y supervisar la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y la infraestructura hidráulica respectiva, de conformidad con el Artículo 20 de la Ley;

II.- Llevar a cabo la supervisión, control, evaluación, intervención, normatividad y asistencia a los concesionarios o contratantes, a fin de que la construcción, administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento se realicen cumpliendo estrictamente con los lineamientos de eficiencia y calidad que se establezcan en la Ley, en el presente Reglamento y los que establezca el propio Consejo Directivo de la Comisión.”

“ARTICULO 6o.- Son funciones de la Comisión las siguientes:

...

XII.- ***Aprobar las tarifas o cuotas*** por los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y manejo de lodos que se cobren en el Municipio de Aguascalientes, así como requerir de pago y gestionar su cobro en los términos de Ley; asimismo, en su caso, aprobar las tarifas a las que se sujetará la prestación del servicio respecto de la conducción, distribución, potabilización y suministro de agua potable;...”

“ARTÍCULO 16.- EL Consejo Directivo para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión, tendrá las más amplias facultades de dominio, administración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a la Ley, así como las siguientes atribuciones:

...

III.- Autorizar las tarifas o cuotas que se aplicarán para los cobros de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en el Municipio de Aguascalientes, previo estudio tarifario que se realice;...”

De ahí que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) sea la encargada de regular y garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a los asentamientos humanos municipales



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 2084/2016

del Municipio de Aguascalientes, con la calidad, cantidad y continuidad que permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad, con tarifas equitativas y en forma sustentable; además de llevar a cabo la supervisión, control, evaluación, intervención, normatividad y asistencia a la concesionaria, a fin de que la construcción, administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento se realicen cumpliendo estrictamente con los lineamientos de eficiencia y calidad que para tal efecto se establezcan.

Es decir, es el propio Municipio de Aguascalientes, a través del órgano municipal (CCAPAMA) quien establece las tarifas o cuotas por los servicios de agua potable y alcantarillado en el Municipio de Aguascalientes, considerando que ello era suficiente para que no se dejara al arbitrio del concesionario el establecimiento de las mismas.

Asimismo, tampoco expone la parte actora por qué las tarifas medias y la estructura tarifaria son incongruentes, de tal suerte que la actuación de la demandada le hubiere dejado en estado de indefensión.

De ahí, lo ineficaz de su argumento, pues nada expone respecto por qué las tarifas aprobadas por la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), no son de las establecidas conforme a la Ley del Agua o por qué afirma que están fuera de esos lineamientos en cuanto a su aprobación, ni expone la razón por la que afirma que las formuladas aprobadas por el Municipio para la actualización de las tarifas no es legal o en su caso por qué afirma que el Municipio no aprobó esas formulas; limitándose a manifestar meras afirmaciones dogmáticas sin sustento alguno.

En consecuencia, toda vez que en la especie el juicio contencioso administrativo es de estricto derecho y no cabe la suplencia

de la queja deficiente, no se puede hacer un estudio general de la resolución impugnada para advertir las violaciones legales de que adolece, de manera que, al manifestar la demandante meras afirmaciones sin sustento, devienen inoperantes los razonamientos analizados en el presente apartado.

Por otro lado, en el SEGUNDO de los conceptos de nulidad afirma la actora que para fijar los consumos que habrían de servir de base para el cobro de la tarifa, lo hace sin una base fáctica real en su perjuicio, a partir de una facultad discrecional que le concede la clausula segunda del anexo J, de la modificación al título de concesión publicada mediante Periódico Oficial de veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en relación con la facultad que le otorga la clausula trigésima del título de concesión, en función con lo indicado por el artículo 51 de la Ley del Agua del Estado de Aguascalientes, en el sentido de plasmar de manera unilateral y sin ningún mecanismo de verificación o cercioramiento por autoridad competente alguna, consumos nunca realizados por la actora.

Es INOPERANTE el argumento precisado por lo siguiente.

La actora sustenta su argumento en que la concesionaria tiene la facultad de elaborar los recibos-factura de manera unilateral sin participar al usuario los conceptos y montos que debe cubrir este último.

Sin embargo, el argumento no está dirigido a combatir los elementos que la concesionaria demandada tomó en cuenta para la determinación del cobro impugnado.

Es decir, con el concepto de nulidad no se combate mediante un razonamiento lógico jurídico concreto el sustento de la determinación impugnada, aunado a que del recibo impugnado se obtiene que la concesionaria expuso como sustento de su determinación, los siguientes datos:

CONCEPTO FACTURADO	IMPORTE
ADEUDO ANTERIOR	16,848.48



PODER JUDICIAL
 ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

CONSUMO	381.66
IVA 16 %	2,760.19
RECARGOS	67.04
Ajuste por servicio parcial	-45.80
Redondeo en caja	-0.57
SUMA TOTAL	20,011.57
TOTAL A PAGAR	20,011.00

INFORMACIÓN DE SUS CONSUMOS		FECHA DE LECTURA
LECTURA ACTUAL	1	01/Jul/2016
LECTURA ANTERIOR		
CONSUMO DEL PERIODO M ³ (Reste lectura anterior a la actual)	0	CUA-02-2016
CONSUMO FACTURADO M ³ (Mensual y por vivienda)	0	

ELEMENTOS PARA CÁLCULO DEL CONSUMO	
NIVEL TARIFARIO	COMERCIAL unico
RANGO DEL CONSUMO	0.00-10.00
VOLUMEN BASE MENSUAL	0.00
VOLUMEN M ³ ADICIONAL	7.00
COSTO VOLUMEN BASE (1)	381.66
COSTO M ³ ADICIONAL	0.00
COSTO TOTAL M ³ ADICIONAL (2) (Consumo adicional por m ³ adicional)	0.00

...
 “El valor del consumo se determina conforme al siguiente cálculo: Consumo = monto base + costo total m³ adicional. Ubica tu nivel tarifario e identifica el rango de consumo para establecer el volumen base, el monto base y el costo del m³ adicional a tu cargo. El m³ adicional = volumen facturado – volumen base. El costo total del m³ adicional = m³ adicional x costo m³ adicional.”

Luego, a efecto de analizar la legalidad de lo ahí expresado, la parte actora estaba obligada a exponer de manera razonada, por qué dichos datos son incorrectos o insuficientes para justificar el cobro que se le hace.

No obstante, nada dijo al respecto, pues se **limitó a exponer de manera general y dogmática** que para fijar los consumos que habrían de servir de base para el cobro de la tarifa, la concesionaria lo hace sin una base fáctica real en su perjuicio, a partir de una facultad discrecional que le concede la clausula segunda del anexo J, de la modificación al título de concesión publicada mediante Periódico Oficial de veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en relación con la facultad que le otorga la clausula trigésima del título de concesión, en función con lo indicado por el artículo 51 de la Ley del Agua del Estado de Aguascalientes, en el sentido de plasmar de manera unilateral y sin ningún mecanismo de verificación o cercioramiento por autoridad competente alguna, consumos nunca realizados por la actora.

Manifestaciones que son ambiguas y superficiales, en tanto que no señala ni concreta razonamiento alguno capaz de ser analizado, pues no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que evita referirse de manera directa respecto de las razones que asentó la concesionaria, en cuanto a los elementos que tomo para determinar el cálculo del consumo y su respectivo cobro.

Ante la falta de argumentos concretos que permitan realizar un estudio respecto la legalidad de la resolución impugnada, subsiste la legalidad de ésta, quedando firme y válida de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 6° de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado.

Al respecto, es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/48, de la novena época, con número de registro: 173593, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indica:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 2084/2016

EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que etíope referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se vierten no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.”

De igual forma, también es **Inoperante** el concepto de nulidad **TERCERO** en el cual señala que la resolución impugnada no se encuentra firmada por servidor público alguno.

Es así, toda vez que si bien es cierto que el aviso-recibo (acto impugnado) carece de firma autógrafa por parte de la autoridad emisora del mismo, no menos cierto es que el particular demandante no ataca mediante un razonamiento lógico jurídico, el por qué es inválida o insuficiente la **firma o sello digital** que aparece en el aviso-recibo impugnado; entendido éste como una cadena de caracteres generada con motivo de la emisión del recibo de pago por parte de la empresa, con lo que la demandada autentifica el contenido del documento y constituye un mensaje de que dicha autoridad emitió el mismo.

Es decir, si bien el acto administrativo no se encuentra firmado autógrafamente, ello no trae la consecuencia de considerar que no cumple con los requisitos que exige el acto administrativo impugnado, pues el artículo 4° de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes en su fracción IV establece que el acto administrativo debe constar por escrito y con la firma autógrafa o electrónica certificada de la autoridad que lo expida.

Ello, porque la firma electrónica o sello digital sustituye a la autógrafa, con lo cual se garantiza la integridad del documento y se producen los mismos efectos que las leyes otorgan a los que cuentan con firma autógrafa, de entre los que se encuentran el otorgarles el mismo valor probatorio.

De ahí que su argumento resulte ineficaz.

Así las cosas, al ser **INOPERANTES** los conceptos de nulidad, lo que procede es declarar la **VALIDEZ** de la resolución impugnada.

Por las razones que se informan en este fallo, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 60, y 62, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, se resuelve:

PRIMERO. No fue procedente la acción de nulidad ejercida por la actora.

SEGUNDO. Se declara la **VALIDEZ** de la determinación contenida en el recibo de pago número *** emitido por la concesionaria “Proactiva Medio Ambiente CAASA”, S.A. de C.V, el *veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis*.

TERCERO. Notifíquese personalmente

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los Magistrados Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz, siendo ponente el último de los nombrados, quienes conjuntamente firman ante la Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, secretaria general de acuerdos, que autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos del veinte de noviembre de dos mil dieciocho. Conste L'ARQ/L'SAGT



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 2084/2016

A continuación se estampan las firmas de los magistrados, así como de la secretaria general de acuerdos, quien a su vez,

CERTIFICA

Que las anteriores copias concuerdan fielmente con su original que obran en el expediente número 2084/2016, las que se autorizan para notificar a las partes. Va en *catorce páginas*, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Doy fe

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES